

Beltrán, Consuelo Ahumada. **La hegemonía de Estados Unidos y el conflicto sociopolítico en la Región Andina.** *En publicación: Filosofía y teorías políticas entre la crítica y la utopía.* Hoyos Vásquez, Guillermo. CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Buenos Aires. 2007. ISBN: 978-987-1183-75-3.

Disponible en: <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/grupos/hoyos/07Beltran.pdf>

Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales de América Latina y el Caribe de la Red CLACSO
<http://www.clacso.org.ar/biblioteca>
biblioteca@clacso.edu.ar

CONSUELO AHUMADA BELTRÁN*

LA HEGEMONÍA DE ESTADOS UNIDOS Y EL CONFLICTO SOCIOPOLÍTICO EN LA REGIÓN ANDINA**

EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, las relaciones entre Estados Unidos y la Región Andina han girado en torno a tres temas que sintetizan las prioridades del llamado Nuevo Orden Mundial: la política antinarcóticos, la cruzada antiterrorista y las medidas de liberalización económica y comercial impuestas por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización Mundial del Comercio (OMC).

El objetivo del presente artículo es examinar cómo se han manifestado esas estrategias en la Región Andina. El análisis se concentra en dos partes: la primera se refiere al Nuevo Orden Mundial y la Estrategia de Seguridad Nacional de EE.UU., y la segunda al Plan Colombia y la Iniciativa Regional Andina (IRA), en conexión con la agenda global del país del Norte.

* PhD en Ciencia Política de la New York University. Profesora Titular de la Universidad Javeriana de Bogotá. Directora de la Maestría en Estudios Latinoamericanos y del Observatorio Andino de la misma Universidad. Directora de la revista *Nueva Gaceta*.

** Una versión preliminar del presente artículo, en el cual se basó la ponencia presentada en el seminario del Grupo de Trabajo Filosofía Política de CLACSO, apareció publicado en la *Revista Iberoamericana de la Universidad de Sophia* (Tokio) Vol. XXV, N° 2, segundo semestre de 2003.

DEL NUEVO ORDEN MUNDIAL A LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD NACIONAL

LOS LINEAMIENTOS DEL ORDEN DE LA POSGUERRA FRÍA

La guerra contra las drogas iniciada por EE.UU. a fines de la década del ochenta, la cruzada antiterrorista luego del 11 de septiembre de 2001 y la consolidación de su poder hegemónico global han representado nuevos retos para la región en lo que respecta a la intervención política y militar estadounidense. Retos que provienen de la aplicación del Plan Colombia y la IRA, de las políticas de ajuste fiscal y el proceso de liberalización económica y comercial que debían concretarse en el Acuerdo de Libre Comercio para las Américas (ALCA) y/o los acuerdos bilaterales de libre comercio entre el país del Norte y las naciones andinas.

Al despuntar la década del noventa, el presidente George Bush (padre) estableció los lineamientos centrales de lo que sería el Nuevo Orden Mundial, confeccionado a la medida de los intereses imperiales de su país. Poco después de la guerra del Golfo Pérsico, planteó que la construcción de este nuevo orden debía basarse en un sistema de seguridad global.

A partir de ese momento, las guerras conducidas por la potencia hegemónica marcan una ruptura de plano con la legalidad internacional. Como señala Danilo Zolo, la violación del orden mundial no ha tenido límites. Así, la primera guerra del Golfo Pérsico ocasionó la muerte de cerca de 300 mil personas, entre civiles y militares, sin contar las víctimas provocadas por el prolongado embargo posterior a Irak. Se utilizaron proyectiles de uranio empobrecido y bombas de racimo, así como los mortíferos *quasinuclear fuel-air explosives* (Zolo, 2003: 191). La segunda guerra del nuevo período fue la de Bosnia, una intervención que también comandó la superpotencia. En febrero de 1999, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) lanzó el ataque militar contra Yugoslavia sin autorización del Consejo de Seguridad y en flagrante violación del derecho internacional. Posteriormente, en el marco de la cruzada antiterrorista, vendrían las intervenciones en Afganistán en 2001 e Irak en 2003.

La década del noventa se caracterizó por la consolidación del poderío político y militar de EE.UU. y por su recuperación económica. Se generalizaron las políticas neoliberales en el mundo entero, pero en especial en América Latina, área definitiva para el buen desempeño de la economía estadounidense. Las relaciones de este país con la región le permitieron un crecimiento económico sin precedentes, que se expresó en condiciones muy favorables para la inversión de sus empresas multinacionales, en el marco de las políticas de privatización de las empresas estatales que adoptaron todos los países de la región. No obstante, al comenzar el nuevo siglo, en los inicios de la administración del nuevo Bush, la economía estadounidense mostraba claros signos de recesión.

Los eventos del 11 de septiembre de 2001 se producen en este contexto de consolidación del poderío político y militar de EE.UU. y de incremento de sus dificultades económicas. El gobierno reaccionó de inmediato y anunció el lanzamiento de su cruzada mundial contra el terrorismo, al tiempo que proclamó que su blanco central sería el llamado *eje del mal*, conformado por Corea del Norte, Irán e Irak.

LA DOCTRINA DE SEGURIDAD NACIONAL

Meses después de los atentados de septiembre, en un discurso pronunciado en la Academia Militar de EE.UU. en West Point (Nueva York) el 1 de junio de 2002, el presidente George W. Bush se refirió a la que sería su estrategia para la nueva época:

La guerra contra el terror no se ganará en la defensiva. Debemos llevar la batalla al enemigo, desbaratar sus planes, y confrontar las peores amenazas antes de que emerjan. En el mundo en el que entramos, el único camino hacia la seguridad es la acción. Y esta nación actuará [...] Y nuestra seguridad requerirá que todos los americanos miren hacia el frente con resolución y estén listos para la acción preventiva cuando sea necesario para defender nuestra libertad y para defender nuestras vidas (Office of the Press Secretary, 2002).

El 20 de septiembre de 2002, el mandatario estadounidense presentó ante el Congreso su Estrategia de Seguridad Nacional y dicho anuncio fue catalogado por los medios como una abierta declaración de hegemonía por parte de EE.UU. (*Newsweek*, 2002-2003: 10). Al tiempo que invocó a los Padres Fundadores, Bush realizó un nuevo llamado al Destino Manifiesto de Wilson y afirmó que “las grandes batallas del siglo XX terminaron con un modelo único sostenible para el éxito nacional: libertad, democracia y libre empresa” (*Newsweek*, 2002-2003: 14). Señaló que la nueva Estrategia, más conocida como la Doctrina Bush, se basaría en un internacionalismo que reflejaría “la unión de nuestros valores con nuestros intereses”.

Los principales componentes de esta doctrina son los siguientes (*Newsweek*, 2002-2003: 26-28):

- Noción de guerra preventiva: se plantea la identificación y destrucción de la amenaza representada por los denominados “estados canallas” (*rogue states*) antes de que esta llegue a las fronteras. Se afirma que, como asunto de defensa propia, EE.UU. actuará contra las amenazas emergentes antes de que se constituyan por completo.
- Sobre las armas de destrucción masiva: la doctrina dispone la desaparición de todo compromiso de reducir su propio arsenal militar

por parte de EE.UU., tal como estaba previsto en el tratado de no proliferación de armas. Por el contrario, manifiesta el propósito de establecer el predominio absoluto del país en términos militares.

- Sobre la disuasión y la prevención: se afirma que EE.UU. ya no puede limitarse solamente a una posición de reacción, característica de la Guerra Fría. “La inhabilidad para disuadir a un atacante potencial, la inmediatez de las amenazas de hoy y la magnitud del daño potencial no dan lugar para tal opción. No podemos permitir que nuestros enemigos golpeen primero” (*Newsweek*, 2002-2003: 27), detalla el documento.
- Sobre las alianzas: Bush manifiesta que su país se esforzará por alcanzar alianzas y lograr el apoyo de la comunidad internacional, pero estará preparado para actuar sólo cuando sus intereses y responsabilidad única así lo requieran.
- Sobre la fuerza militar: se expresa que EE.UU. debe mantener la capacidad de derrotar cualquier intento por parte de un enemigo, sea un Estado o un actor no estatal, de imponer su voluntad en el país, sus aliados y sus amigos. “Nuestras tropas serán lo suficientemente fuertes para disuadir a adversarios potenciales para que no prosigan un incremento militar con el objeto de sobrepasar o equiparar el poder de EE.UU.” (*Newsweek*, 2002-2003: 27).

Desde su promulgación, la Estrategia de Seguridad Nacional ha suscitado polémica y rechazo. Raniero La Valle la califica como la Carta Constituyente del Imperio, porque proclama la existencia de un único modelo aceptable para las naciones, al tiempo que se afirman la singularidad y la supremacía de EE.UU. La guerra de Irak sería la primera guerra fundacional del imperio, por lo que afirmar que la causa de la última agresión a este país fue la necesidad de controlar sus suministros de petróleo no resulta una explicación suficiente. Señala el mismo autor que la novedad de la Doctrina Bush es que ya no se invoca la importancia de la Alianza Atlántica:

Estados Unidos se sitúa como cosa distinta de Occidente. Ya no son una parte del mundo, sino que están por encima del mundo, como soberano universal de una geografía global de la cual Occidente es sólo una parte (La Valle, 2003: 183).

Resulta claro que la Estrategia de Seguridad Nacional estadounidense pretende redefinir unilateralmente las normas del derecho internacional relativas al uso de la fuerza armada, en lo que constituye una clara regresión de las reglas de las relaciones internacionales. En ese sentido,

la última Guerra del Golfo fue la anulación práctica de los principios democráticos del derecho.

Adicionalmente, la orientación prioritaria hacia la lucha contra el terrorismo por parte de EE.UU. condujo a un replanteamiento de la política de los derechos humanos de la potencia. Sin duda, durante más de un siglo, este país ha arrasado con los derechos básicos de los pueblos del mundo, sin la menor consideración, en defensa de sus intereses imperiales. No obstante, se ha valido de la consigna de los derechos humanos como pretexto para intervenir; y ello resulta muy claro en el caso de las imputaciones que ha hecho al ejército colombiano por violaciones a tales derechos. Sin embargo, esta política pierde su utilidad en el nuevo contexto, tal como quedó demostrado en el caso de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mary Robinson, quien se vio obligada a renunciar a su postulación para un nuevo período en el cargo ante la pérdida del respaldo de EE.UU. Su delito fue haber organizado la conferencia contra el racismo y la xenofobia en Sudáfrica, la que sufrió el sabotaje de la superpotencia e Israel. Pero el conflicto mayor lo tuvo como consecuencia de sus críticas a la conducta de los Estados Unidos en Afganistán y a su señalamiento de que sus medidas de retaliación por los atentados terroristas no podían exceder los límites del derecho internacional. En particular, censuró el tratamiento inhumano a los prisioneros de Guantánamo por parte del gobierno estadounidense.

LA IMPORTANCIA DEL PETRÓLEO

En la aguda confrontación económica y comercial desatada entre los países industrializados durante los últimos años, el control de los recursos naturales estratégicos se tornó fundamental, tal como lo señala Michel Klare:

Las guerras adelantadas por recursos durante la posguerra fría no constituyen eventos aislados o aleatorios. Por el contrario, son un conjunto que se inscribe dentro de un cuadro geopolítico más amplio [...] Las guerras del futuro tendrán de manera masiva como objetivo la posesión y el control de bienes económicos esenciales y en particular de recursos necesarios para el funcionamiento de las sociedades industriales modernas (Ivekovic, 2003: 35).

El petróleo sigue siendo la base de la economía mundial, porque representa el 40% de la energía del planeta. Los países industrializados dependen cada vez más de los suministros de crudo por parte de los países productores, y EE.UU. es el que tiene una mayor dependencia. Al ritmo actual, sus reservas alcanzan para tres años de consumo, por lo que

el aprovisionamiento de crudo ha sido declarado asunto de Seguridad Nacional (Houtart, 2003: 9). El país consume 19 millones de barriles diarios (mbd), lo que representa el 29% del consumo mundial, y sólo produce 8 mbd, por lo que debe importar 11. De acuerdo con fuentes del propio gobierno estadounidense, esa cifra de importación deberá aumentar a 25,7 mbd en 2015, lo que significa que el país comprará entonces el 81% de su consumo (Álvarez, 2003: 25).

Sin duda, la estrategia de EE.UU. consiste en controlar las fuentes energéticas en el mundo entero y en la búsqueda imperiosa de nuevos recursos, que se ve estimulada con la llegada al poder de la Casa Blanca del grupo de “los halcones petroleros”, que representa el ala más conservadora del Partido Republicano. Sus voceros son el mismo presidente Bush y los altos funcionarios de su gobierno, entre ellos el vicepresidente del país, Dick Cheney, el anterior secretario de Defensa, Donald Rumsfeld y la anterior consejera de Seguridad y actual Secretaria de Estado, Condoleezza Rice. Mientras Cheney fue administrador de la Halliburton Petroleum, empresa líder en servicios petroleros y marcada por escándalos de corrupción, Rice trabajó durante nueve años en la Chevron. Tanto el presidente como el vicepresidente y el secretario de Defensa tuvieron nexos directos con el gigante energético Enron y se vieron involucrados en su escandaloso desplome. Cheney, por su parte, admitió haber sostenido seis reuniones diferentes con los ejecutivos de Enron durante el período en que se estaba estructurando la política energética de la administración Bush.

La importancia del Golfo Pérsico como proveedor mundial de petróleo sigue siendo crucial. De sus cálidas aguas parten a diario 15 millones de barriles de crudo hacia EE.UU., Japón y Europa. Según el World Energy Outlook 2002, de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), el consumo de petróleo pasará de los 75 millones de barriles diarios actuales a 120 millones en 2030, mientras que la dependencia del Oriente Medio en cuanto a aprovisionamiento se incrementará del 38% en 2000 al 54% en 2030 (Negri, 2003: 50).

Con la actual administración estadounidense, la búsqueda de petróleo se ha llevado a cabo de manera sistemática; prueba de ello son los viajes constantes del secretario de Energía, Spencer Abraham, a los países petroleros. Según sus propias declaraciones, el objetivo de dicha estrategia consiste en “desarrollar fuertes relaciones comerciales por fuera del Medio Oriente y concebir mecanismos para ayudar a los países que tienen estos recursos para que expandan su sector petrolero” (*Newsweek*, 2002-2003: 27). Sus viajes por el mundo responden a la estrategia planteada en un informe del National Energy Policy Development Group (NEP) –o Política Energética Nacional– publicado el 17 de mayo de 2001 y elaborado por el vicepresidente Cheney. En el NEP se pone de manifies-

to la importancia vital del petróleo para el futuro inmediato del país y se muestra cómo en el Informe Cheney se habla por primera vez de la necesidad de adquirir nuevas reservas petroleras, a la vez que se plantea una doble estrategia destinada a responder al aumento de las necesidades petroleras en los siguientes veinticinco años. Una de tales necesidades es aumentar las importaciones del Golfo Pérsico, realizando “vigorous esfuerzos” por persuadir a Arabia Saudita y los países vecinos de otorgar a las compañías estadounidenses contratos para la realización de grandes obras tendientes a modernizar la infraestructura, con el fin de aumentar la producción. Otra estrategia consiste en acentuar la diversificación geográfica de las importaciones petroleras, para poder reducir en el futuro el impacto de las turbulencias del Medio Oriente, una región crónicamente inestable. Se recomienda aumentar la producción del Mar Caspio, del África Subsahariana y el G-3 de América Latina (Ragozzino, 2003: 56; *Le Monde diplomatique*, 2002).

La Doctrina Bush, por su parte, se refiere específicamente a la prioridad que representa el petróleo para la seguridad de EE.UU. Afirma Alan P. Larson, subsecretario de Estado para Asuntos Económicos, Comerciales y Agrícolas:

La Estrategia de Seguridad Nacional reconoce la importancia de fortalecer nuestra seguridad económica, desarrollar el comercio y la inversión y fomentar el desarrollo económico [...] Trabajamos para lograr estas metas por medio de la diplomacia y de compartir la experiencia de nuestro propio desarrollo, basado en nuestras libertades políticas y económicas. El éxito en el logro de estas metas de política económica es parte del núcleo de nuestra Estrategia de Seguridad Nacional (Larson, 2002: 12).

Y para que no quede duda alguna sobre la correlación entre esta estrategia y las políticas neoliberales impuestas en el mundo entero, señala:

Trabajaremos con las instituciones financieras internacionales para suministrar asesoría y apoyo a los países que se esfuerzan por aplicar políticas macroeconómicas acertadas, ofrecen mayor transparencia, adoptan normas prudentes y mantienen niveles de deuda manejable y una inflación baja (Larson, 2002: 14).

EL GASTO MILITAR

La industria y el gasto militar resultan fundamentales para la consolidación del poderío hegemónico de EE.UU., sin duda el país más poderoso de la historia de la humanidad, el primer productor de armas del mundo y el de mayor presupuesto militar.

En la cruzada global contra el terrorismo, el complejo militar industrial se incrementó en forma sustancial. El presupuesto para el sector fue de 383 mil millones de dólares en 2003: un incremento de 50 mil millones respecto a la cantidad asignada en 2002, cuando el Pentágono contó con cerca de 123 mil millones de dólares para adquirir y desarrollar nuevas armas. No se incluyen aquí otros recursos, como 16.800 millones de dólares para ojivas nucleares provenientes de la Secretaría de Energía o 146 millones contra el terrorismo biológico asignados por la Secretaría de Agricultura, entre otros. Este presupuesto es de tal magnitud que duplica el de los quince países de la Unión Europea en su conjunto. Si la tendencia actual continúa, su gasto militar pronto será equivalente al de todos los demás países del mundo juntos. Más aún, la diferencia no es sólo de recursos sino también de capacidad técnica, área en la que EE.UU. se encuentra tres generaciones por delante de los europeos.

De acuerdo con Michel Klare, desde su campaña presidencial, George W. Bush mostró su inclinación hacia el incremento del gasto militar. En septiembre de 1999, en un discurso en la Academia Militar de Charleston, Carolina del Sur, expuso su plan de “transformación” del aparato militar del país y se comprometió a iniciar la “construcción del ejército del siglo XXI”. El objetivo consistía en asegurar la invulnerabilidad del territorio mediante un eficaz escudo antimisiles –una reedición de la controvertida “Guerra de las Galaxias” anunciada por el presidente Reagan en la década del ochenta– y aumentar la capacidad de EE.UU. para invadir a potencias regionales hostiles (Ivekovic, 2003: 66).

LA REGIÓN ANDINA: DEL PLAN COLOMBIA A LA IRA EL PLAN COLOMBIA

El Plan Colombia despertó una fuerte controversia nacional e internacional a partir del momento en que se anunció y presentó para su aprobación al Congreso de EE.UU., en octubre de 1999. Desde un principio, se manifestaron dos posiciones opuestas frente a esta estrategia concebida por el gobierno de Bill Clinton. La primera, por parte de sus defensores –los altos funcionarios de ambos países–, que insistieron en presentarlo como un “Plan para la paz, la prosperidad y el fortalecimiento del Estado” y la panacea para todos los males del país. La segunda, representada por diversas organizaciones políticas y sociales, entre ellas los sindicatos y numerosas organizaciones no gubernamentales internacionales y nacionales, que han insistido en que el Plan Colombia sólo servirá para incentivar la guerra y la crisis social debido a su carácter marcadamente militarista¹.

¹ Para conocer visiones críticas –en mayor o menor medida– sobre los distintos aspectos del Plan Colombia y la IRA, ver Estrada (2001) e IEPRI (2001).

Sin embargo, dicha estrategia también implica otros graves problemas, como el hecho de que atenta contra la soberanía nacional del país. La versión definitiva del Plan Colombia fue elaborada a partir de las apreciaciones de una comisión del gobierno estadounidense que estuvo en Colombia durante dos meses, y fue discutida y aprobada en el Congreso de EE.UU. antes de que se conociera siquiera en el país sudamericano. Más aún, el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) adoptó este plan como documento central de su cuatrienio, una vez que su propio plan de desarrollo fue declarado inexecutable por la Corte Constitucional. En otras palabras, el Plan Colombia se convirtió en la carta de navegación del gobierno colombiano.

LA FUMIGACIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS

Uno de los aspectos más cuestionados del Plan Colombia ha sido su estrategia antinarcóticos, centrada en la fumigación o aspersión aérea de cultivos ilícitos. Los graves efectos que ello causa sobre las condiciones de vida y de salud de la población, la destrucción del medio ambiente, de los cultivos de supervivencia y las fuentes de agua han sido objeto de denuncia permanente en el ámbito internacional. Tampoco podría dejar de mencionarse su impacto nefasto sobre las condiciones sociales de la región, que se expresa en el incremento del desplazamiento forzado de familias enteras hacia los países vecinos, pero especialmente hacia Ecuador. Según cálculos del mismo documento aprobado del Plan Colombia, cerca de 400 mil personas tendrían que salir forzosamente, por lo que se asignó un recurso de inversión social con el fin de proveer atención en campamentos para las familias afectadas.

De acuerdo con un informe de la ONG Comité Estadounidense para los Refugiados (USCR), en Colombia existen 2,45 millones de desplazados, de los cuales el 47% son mujeres y niños; ello convierte al país en el segundo del mundo con la población más alta de desplazados internos, después de Sudán. El documento responsabiliza al Plan Colombia por el desplazamiento de más de 36 mil personas durante 2001 y afirma que 42 pueblos fueron completamente abandonados durante este mismo período (*El Tiempo*, 2002d: 1-20).

Sin duda, la fumigación aérea es una de las estrategias vitales del Plan Colombia. En abril de 2002, altos funcionarios del Departamento de Estado anunciaron que su país cancelaría los programas de sustitución de cultivos que financiaba en los departamentos de Putumayo y Caquetá. El programa de desarrollo alternativo aparecía como uno de los ejes del Plan Colombia, pero dos reportes oficiales de EE.UU. –uno de la Contraloría General del Congreso (GAO) y otro del Departamento de Estado– habían advertido que el programa no estaba funcionando (ARI, 2003: 10). Estas afirmaciones en torno al fracaso de la erradica-

ción manual permiten comprender el énfasis fundamental que se le está proporcionando a la fumigación aérea. En ese sentido, el subsecretario de Asuntos Antinarcóticos del Departamento de Estado estadounidense, Rand Beers, afirmó tiempo atrás: “Intensificaremos las fumigaciones”, y agregó: “Sí, vamos a fumigar todo el país para que la gente entienda que está corriendo un riesgo” (*El Tiempo*, 2001b: 1-3).

En lo que respecta a este tema, en marzo de 2003, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez anunció que las fumigaciones no sólo serían más agresivas, sino que se harían con una mayor cantidad de glifosato (se incrementó de 8 a 10,4 litros por hectárea). Esta decisión se adoptó luego de que el zar antidrogas de EE.UU., John Walters, presentara ante el Congreso de su país un informe en el que la CIA afirmaba que, gracias a las fumigaciones aéreas, se había logrado una reducción del 15% de los cultivos de coca y amapola en Colombia. De acuerdo con el documento, en agosto de 2002, la superficie sembrada con coca alcanzaba las 144.450 hectáreas, 25.350 menos que en el mismo mes de 2001, cuando sumaban 169.800 (*El Universo*, 2003a).

El gobierno estadounidense ha sido consciente de los efectos del Plan Colombia sobre las fronteras. William Brownfield, subasistente del Departamento de Estado para el hemisferio Occidental, admitía:

Es materia de sentido común reconocer que, en la medida en que se aplique el Plan y se logren progresos en el esfuerzo por combatir el narcotráfico y en la búsqueda de la paz, es inevitable suponer que habrá algún impacto en los países fronterizos de Colombia (*El Universo*, 2003b).

El Departamento de Estado estima que sólo para el caso de Ecuador, en la frontera con el departamento de Putumayo se dará un éxodo de 30 a 40 mil desplazados por la implementación de dicho plan. Ante esta perspectiva, el propósito es que Ecuador cierre la frontera y colabore para evitar que el problema de Colombia llegue a ese país, según declaraciones de la embajadora de EE.UU. en Ecuador, Kristie Kenney (*El Universo*, 2003b).

FINANCIACIÓN Y COMPONENTE MILITAR

Otro punto bastante controvertido del Plan Colombia ha sido su financiación y la asignación de sus recursos. Inicialmente, se afirmó que el proyecto costaría 7.441 millones de dólares, de los cuales Colombia aportaría el 48,5%, la llamada comunidad internacional el 46,6%, y el 4,9% restante correspondería a recursos obtenidos mediante crédito. EE.UU. autorizó la entrega de 1.158 millones: 634 serían utilizados para dotar de helicópteros a la policía y el ejército y apoyar su lucha contra el narcotrá-

fico; 224 para la atención a los desplazados y la sustitución de cultivos; y 300 en concepto de la asistencia ordinaria que brinda el país por un período de dos años. No obstante, la suma total entregada por EE.UU. finalmente fue reducida a 860 millones de dólares (Estrada, 2001: 43).

La aprobación del Plan Colombia en el Congreso estadounidense fue precedida por un intenso cabildeo, estimulado con dinero para las campañas políticas de los congresistas, por parte de firmas estadounidenses proveedoras de material y servicios bélicos que estaban ansiosas de quedarse con una porción importante de los recursos asignados al país. La Occidental Petroleum Company, por ejemplo, entregó 6 millones de dólares para esas campañas políticas, incluida la de Hillary Clinton, esposa del entonces presidente de EE.UU. (Castro Caycedo, 2001: 31-49).

No obstante, el dinero que aprobó el Congreso como ayuda ha sido recuperado por las multinacionales de ese país por otras vías: venta de aviones y equipo militar, herbicidas, fumigaciones y productos biológicos, entrenamiento y asesoría para las fuerzas armadas colombianas, así como radares y otros dispositivos. Al respecto, el periodista Germán Castro Caycedo efectúa un recuento de algunas de las empresas beneficiadas mediante la asignación de dichos recursos. El primer giro que realizó el gobierno de EE.UU. con cargo a esta cuenta fue de 30 millones de dólares a favor de Northrop de Los Ángeles, para comprar un avión RC-7 multifunción de reconocimiento aéreo ARL-M. Dicha nave fue entregada al ejército de ese país como reposición de un avión similar que se estrelló contra el Cerro Patascoy, al sur de Colombia, en julio de 1999. El avión estaba comandado por militares estadounidenses y realizaba espionaje contraguerrillero. A la Lockheed Martin de Palmdale, California, le fueron entregados 68 millones para mejorar la tarea de la aviación, actualizando cuatro radares, que fueron adquiridos con dineros del presupuesto nacional y entregados a EE.UU. para que los manejaran militares de ese país. La firma Ayres Corporation de Albania recibió 54,5 millones de dólares para modernizar aviones de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), así como para desarrollar programas de interdicción. Las compañías Bell Helicopter Textron y United Technologies Corporation Sikorski Aircraft de Stratford, Connecticut, han firmado contratos para enviar nuevos helicópteros Blackhawks y Super Huey II; la primera recibió 75,6 millones de dólares y la segunda 234; la empresa de asesores militares Military Personnel Resources INC trabaja directamente con las fuerzas armadas colombianas (Sarmiento, 2001: 41).

En este asunto del negociado que han hecho las empresas extranjeras con el Plan Colombia, merece mención especial el caso de la DynCorp de Virginia, contratada en el año 2000 por el gobierno de EE.UU. por una suma de 635 millones de dólares, para adelantar bue-

na parte de las labores de fumigación aérea, espionaje para la CIA e incluso eventuales acciones de combate en territorio colombiano. A pesar de ser estadounidense y aparecer en la lista de la revista *Fortune* entre las quinientas empresas más poderosas de ese país, la compañía fue registrada en Colombia como originaria de Gran Bretaña. Opera secretamente aquí desde 1991, por cuanto ni siquiera las entidades estatales sabían de sus contratos. Esta empresa se vio involucrada en un escándalo cuando el diario canadiense *The Nation* denunció que había traficado con heroína dentro del Plan Colombia².

Otro asunto considerado bastante polémico ha sido la violación por parte del Departamento de Estado de los topes legales establecidos por el Congreso en torno a la contratación de personal para la ejecución del Plan Colombia. De acuerdo con la ley de la cual surgió este proyecto, la presencia de EE.UU. en nuestro país debía limitarse a 500 militares y 300 contratistas civiles, como máximo, durante un mismo período de tiempo. No obstante, dicho departamento y las firmas contratistas que operan en Colombia resolvieron vincular a personal de Guatemala, Honduras y Perú, de manera que el total de extranjeros que trabajan en el proyecto supera los 400. Sin embargo, de acuerdo con el Departamento de Estado, “la puesta en práctica del Plan Colombia requiere de mucho personal, por lo que se va a requerir de mucho más. Pero el tope impuesto por el Congreso limita nuestro campo de acción”. Y agrega el funcionario: “Al contratar a extranjeros se reduce el riesgo de que sean muchos los estadounidenses en la primera línea de fuego” (*El Tiempo*, 2001a: 1-10).

LA INICIATIVA REGIONAL ANDINA (IRA) Y EL GIRO HACIA LA CRUZADA ANTITERRORISTA

Los atentados del 11 de septiembre y la cruzada global en contra del terrorismo, sin duda, reafirmaron la tendencia hacia una mayor represión de la política de EE.UU. sobre la región andina. En consonancia con el giro que se presentó después de este episodio, los pronunciamientos de los funcionarios de Washington sobre Colombia comenzaron a reflejar la nueva situación y las FARC, principal organización guerrillera del

2 A instancias de la embajada de EE.UU., el ex mandatario Andrés Pastrana hizo pasar a retiro a un general de la policía porque se atrevió a trasladar a la Fiscalía, para su investigación, dos envases de la mencionada empresa con rastros de heroína decomisados en el aeropuerto El Dorado, Bogotá, el 12 de mayo de 2000. Dichos envases iban a ser enviados por operarios de la firma en Colombia a una de sus sedes en la Florida: “Los gringos que fumigan en el Plan Colombia son una banda de Rambos sin Dios ni ley que incluso se han visto involucrados en un escándalo de tráfico de heroína” (ver “Mercenarios”, citado en *La Bagatela*, 2004).

país, pasaron de ser una organización narcotraficante a una guerrilla terrorista que amenaza la seguridad hemisférica (Tickner, 2002: 1-24).

En medio de la feroz reacción desatada por los atentados de septiembre, el gobierno de EE.UU. tomó la decisión de reforzar la lucha contra el terrorismo en toda la región. Meses después, los países andinos se comprometieron a desarrollar una estrategia común de lucha contra los grupos terroristas que recurren al narcotráfico. Tal fue la decisión de la reunión sostenida entre los mandatarios de EE.UU., Colombia, Perú, Bolivia y el vicepresidente de Ecuador, el 24 de marzo de 2002, en Lima.

En la 32ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), reunida en Barbados a comienzos de junio de 2002, se aprobó por absoluta mayoría una nueva Convención Interamericana contra el Terrorismo. Los países miembros de la OEA se comprometieron a incrementar su cooperación y a hacer más estrictos sus controles fronterizos, así como a confiscar los fondos y bienes de los grupos identificados como terroristas. Un punto cardinal de esta convención consiste en que, por primera vez, se excluyen los motivos políticos como causa para negar la extradición de alguien acusado de un ataque terrorista, y los Estados se comprometen a negar asilo o estatus de refugiado a cualquier persona acerca de la cual existan razones fundadas para considerar que ha participado en terrorismo (*El Tiempo*, 2002c: 1-16).

La IRA, presentada al Congreso por el presidente Bush en abril de 2001 y aprobada poco tiempo después, prevé extender la estrategia antinarcóticos y antiterrorista del Plan Colombia a los países limítrofes. De acuerdo con documentos oficiales del gobierno de EE.UU., la Región Andina resulta importante para ese país por las siguientes razones: en ella se encuentran los tres principales productores de droga, que responden por el 100% de la cocaína y el 60% de la heroína que entran al mercado de EE.UU.; en la región hay tres importantes productores de petróleo, Venezuela, Colombia y Ecuador, que le proporcionan a EE.UU. una cantidad significativa de crudo; Colombia es el principal socio comercial de todas las naciones andinas; y, por último, allí están algunos de los países de mayor población de Latinoamérica, incluidos Brasil y Colombia (ARI, 2003).

Según cifras que suministra Ivan Ivekovic, actualmente las importaciones de petróleo estadounidenses provenientes de Venezuela, Colombia y Ecuador son ampliamente superiores a las que salen del conjunto de los países del Golfo Pérsico. Venezuela es el quinto productor mundial de petróleo, uno de los fundadores de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y tiene reservas probadas de petróleo de 77,7 mil millones de barriles. El mercado estadounidense

absorbe alrededor del 59% del petróleo venezolano, que a su vez cubre entre el 13 y el 17% de las necesidades de EE.UU. Colombia, en tanto, posee reservas probadas de petróleo de 1,7 mil millones de barriles aproximadamente. Sin embargo, los yacimientos potenciales, en particular los de la frontera con Venezuela y el departamento de Putumayo, en el sur del país, son mucho más importantes. Ecuador, por su parte, tiene reservas probadas de 2,1 mil millones de barriles, con una producción bruta que en 2001 alcanzaba los 415.000 barriles diarios. La mayor parte de sus explotaciones petroleras se sitúan al este de la Amazonia, en la provincia de Oriente (Ivekovic, 2003: 49).

En el caso de Colombia, el control del petróleo se encuentra estrechamente vinculado a la lucha antiterrorista. El apoyo a la Brigada XVIII para defender el oleoducto Caño Limón-Coveñas, utilizado principalmente por la Occidental Petroleum Company, marcó un giro significativo de la política exterior de EE.UU. hacia este país. El gobierno estadounidense decidió destinar 98 millones de dólares a esta brigada con el objeto de dotarla y capacitar en ella a cerca de 4 mil soldados y adquirir doce helicópteros, todo con el fin de darle movilidad.

Dentro de los argumentos que la administración de EE.UU. ha esgrimido para impulsar la IRA está la necesidad de impedir la expansión a los países vecinos de los problemas relacionados con el narcotráfico y la aplicación del Plan Colombia en el sur del país. Se pretendía, entonces, crear una especie de muro de contención en las fronteras y aumentar significativamente el pie de fuerza en los países más afectados por el conflicto colombiano y el desplazamiento de cultivos de uso ilícito.

El documento oficial de la IRA plantea, además, que “la Región Andina representa un desafío para la política exterior de EE.UU. La democracia está bajo presión allí, el desarrollo económico es lento y el progreso hacia la liberalización es inconstante” (USINFO, 2001).

En esta declaración, el gobierno estadounidense expresa su descontento frente al hecho de que la región se vea cada vez más amenazada por una multiplicidad de factores asociados, entre otros, la debilidad de las instituciones democráticas, la corrupción y la crisis económica. En la perspectiva estadounidense, ha existido un incremento de movimientos políticos catalogados como no democráticos, que expresan su resistencia ante las actuales condiciones sociales, económicas y políticas que se viven en la región (The Center for International Policy's, 2001: 2)³. Ejemplo de ello son el gobierno de Hugo Chávez en Venezuela, el triunfo de Luiz Inácio Lula Da Silva en Brasil y, más recientemente, el

3 Se trata de una hoja informativa del Departamento de Estado sobre la política de EE.UU. con respecto a la Región Andina.

derrocamiento del presidente Gonzalo Sánchez de Losada y la elección de Evo Morales en Bolivia y de Rafael Correa en Ecuador, todo como consecuencia del creciente descontento y movilización social en contra de la agenda neoliberal.

En lo que respecta al desarrollo económico y el comercio, en este documento el gobierno estadounidense recalca la necesidad que tienen los Estados de la región de estabilizar sus economías, por medio de las denominadas reformas estructurales y planes de ajuste fiscal que han venido poniendo en práctica desde la década del noventa (The Center for International Policy's, 2001: 7).

La renovación del Acuerdo de Preferencias Arancelarias (ATPA), ahora conocido como ATPDEA, también hace parte de los puntos fundamentales del tema de desarrollo y comercio en la IRA. Dicho acuerdo fue introducido por el presidente Bush (padre) como parte de la estrategia antidrogas de su país y cubre a los países andinos, con excepción de Venezuela. Sin embargo, para acceder efectivamente a sus limitados beneficios, los países debieron demostrarle al gobierno de EE.UU. que cumplían con veintiún requisitos, que se refieren a temas como la no expropiación, el respeto a la propiedad intelectual, la eliminación de los subsidios a las exportaciones, el compromiso con el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), además del respeto a los fallos de los tribunales de arbitraje. En tal sentido se pronunció el ex secretario adjunto de Comercio, William Lash, durante su visita a Colombia a fines de abril de 2002: “El ATPA fue creado para compensar a los países en su lucha contra las drogas, pero los beneficios no pueden ser gratuitos”, señaló con meridiana claridad (*El Tiempo*, 2002a: 1-12; 2002b: 2-9).

Por último, el Plan Colombia y la IRA aparecen como una megaestrategia para toda la región, andina y amazónica, que coadyuva a fortalecer lo que algunos analistas, como el ecuatoriano Alexis Ponce, han llamado el “posicionamiento unipolar de EE.UU. en la zona andino-amazónica” (Ponce, 2002: 7)⁴. Las principales críticas a estos proyectos provienen tanto de ONG internacionales como de organizaciones sociales y políticas de Colombia y Ecuador, que cuestionan, ante todo, la intromisión estadounidense en los asuntos de estos países, así como la preeminencia de los aspectos militares frente a las prioridades del desarrollo económico y social de los empobrecidos países de la región.

Para concluir, señalemos que las relaciones entre EE.UU. y la Región Andina giran cada vez más en torno a una amplia gama de asuntos que se relacionan con los objetivos prioritarios del Nuevo Orden Mun-

⁴ Alexis Ponce es vocero de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) y del grupo civil de monitoreo de los impactos del Plan Colombia en Ecuador (Ponce, 2002: 7-11).

dial: las políticas de apertura y liberalización económica, la estrategia contra las drogas y la cruzada antiterrorista. Todos ellos son contemplados de manera explícita en la Estrategia de Seguridad Nacional del presidente Bush y han sido acogidos sin el menor cuestionamiento por algunos de los gobiernos de la región, en especial el de Álvaro Uribe Vélez en Colombia.

En dicho contexto, tanto el Plan Colombia como la IRA responden en primera instancia a los intereses estadounidenses, más que a las verdaderas prioridades de los países andinos; así lo confirman algunos informes del Departamento de Estado de EE.UU., en los que se asegura que el éxito de estos países resulta vital para los intereses de Washington en cuanto a la promoción general de democracias fuertes y estables, el mejoramiento de oportunidades de inversión y comercio para las empresas estadounidenses, y la reducción de la producción y tráfico de drogas. Con todo ello, resulta claro que las relaciones entre EE.UU. y la Región Andina reflejan un creciente proceso de recolonización por parte del país hegemónico. En ese sentido, la búsqueda y el control de las fuentes de petróleo y el desarrollo de la industria militar, tan evidentes en la pasada agresión a Irak, también son objetivos estratégicos en Colombia y la región en general.

BIBLIOGRAFÍA

- Ahumada Beltrán, Consuelo 2002 *Cuatro años a bordo de sí mismo. La herencia económica, social y política del gobierno de Andrés Pastrana* (Bogotá: El Áncora).
- Ahumada Beltrán, Consuelo 2004 "Petróleo, conflicto y fronteras en la Región Andina en el marco del hegemonismo norteamericano" en Ahumada Beltrán, Consuelo y Angarita, Telma (eds.) *Conflicto y fronteras en la Región Andina* (Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana).
- Álvarez, Carlos Guillermo 2003 "Les ressorts et les limites de la géopolitique pétrolière" en *Alternatives Sud* (Louvain-la-Neuve) Vol. X, N° 2.
- ARI-Andean Regional Initiative 2003 "FY2002 supplemental and FY2003 assistance for Colombia and neighbors", 8 de enero.
- Castro Caycedo, Germán 2001 "Una feria con dos rostros" en *Con las manos en alto* (Bogotá: Planeta).
- Congreso de Perú 2002 "La visita de George W. Bush". En www.congreso.gob.pe/biblio/pdf/Apoyo/25MARZO2002.pdf.

- El Tiempo* 2001a “Denuncian ‘mico’ en ley del Plan Colombia” (Bogotá) 24 de agosto.
- El Tiempo* 2001b “Intensificaremos las fumigaciones” (Bogotá) 1 de septiembre.
- El Tiempo* 2002a “EU lanza ultimátum” (Bogotá) 30 de abril.
- El Tiempo* 2002b “Los pasos para el ATPA” (Bogotá) 27 de mayo.
- El Tiempo* 2002c “OEA, firme contra el terrorismo” (Bogotá) 4 de junio.
- El Tiempo* 2002d “Sudán y Colombia: 1-2 en desplazados” (Bogotá) 7 de junio.
- El Universo* 2003a (Guayaquil) 25 de marzo. En <www.eluniverso.com> acceso 3 de abril.
- El Universo* 2003b (Guayaquil) 15 de mayo. En <www.eluniverso.com> acceso 20 de mayo.
- Estrada, Jairo 2001 “Elementos de economía política” en Estrada, Jairo (ed.) *Plan Colombia. Ensayos críticos* (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia).
- Houtart, François (dir.) 2003 *Economie et géopolitique du pétrole. Points de vue du Sud. Actualité sociale et politique économie géopolitique, relations internationales, diplomatie* (Centre Tricontinental).
- IEPRI 2001 *El Plan Colombia y la internacionalización del conflicto* (Bogotá: Planeta).
- Ivekovic, Ivan 2003 “Les États-Unis, l'Irak et la géopolitique du pétrole” en *Alternatives Sud* (Louvain-la-Neuve) Vol. X, N° 2.
- La Bagatela* 2004 “Diplomacia forajida, Colombia al despeñadero” (Bogotá) N° 4 julio.
- La Valle, Raniero 2003 “Los años noventa: una restauración de fin de siglo” en Bimbi, Linda (ed.) *No en mi nombre. Guerra y derecho* (Madrid: Trotta).
- Larson, Alan P. 2002 “Prioridades económicas en la Estrategia de Seguridad Nacional” en USINFO-US Department of State's Bureau of International Information Programs. En <www.usinfo.state.gov/journals/itps/1202/ijps/ijps1202.htm> acceso 24 de mayo de 2003.
- Le Monde diplomatique* 2002 “La industria del petróleo y el mundo político republicano” (París) noviembre.
- Negri, Alberto 2003 “Armas y petróleo: política de poder y guerra por la energía” en Bimbi, Linda (ed.) *No en mi nombre. Guerra y derecho* (Madrid: Trotta).

Newsweek 2002-2003 "Mideast oil: what's the alternative?"; "American power" (Nueva York); "The Bush Doctrine"; "America's mission" (Nueva York) diciembre-febrero.

Office of the Press Secretary 2002 "President Bush delivers graduation speech at West Point" (Washington DC: The White House) 1 de junio. En <www.whitehouse.gov/news/releases/2002/06/20020601-3.html> acceso 24 de mayo de 2003.

Ponce, Alexis 2002 "Iniciativa Regional Andina: una estrategia integral para tiempos de guerra global". En <www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/plan/ecuglob.html> acceso 19 de marzo.

Ragozzino, Guglielmo 2003 "La industria del petróleo y el mundo político republicano" en Bimbi, Linda (ed.) *No en mi nombre. Guerra y derecho* (Madrid: Trotta).

Sarmiento, Libardo 2001 "Conflicto, intervención y economía política de la guerra" en Estrada, Jairo (ed.) *El Plan Colombia. Ensayos críticos* (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia).

The Center for International Policy's 2001 "Colombia Project". En <www.ciponline.org/colombia/051704.htm>.

Tickner, Arlene B. 2002 "Bush, Hollywood y las FARC" en *El Tiempo* (Bogotá) 3 de febrero.

USINFO-US Department of State's Bureau of International Information Programs 2001 "La Iniciativa Regional Andina de Estados Unidos". En <<http://usinfo.state.gov/esp/Archive/2005/Jan/12-864945.html>> acceso 13 de abril de 2007.

Zolo, Danilo 2003 "De la guerra moderna a la guerra global" en Bimbi, Linda (ed.) *No en mi nombre. Guerra y derecho* (Madrid: Trotta).